

ARTICULOS / ARTICLES

Posibilidad y límite de las movilizaciones contra las retenciones móviles. Interpretaciones desde una realidad local sobre “el conflicto del campo”

Possibilities and limitations of the demonstrations against sliding export taxes. Interpretations of the "conflicto del campo" from a local reality

Mauricio Moltó

Universidad Nacional del Litoral, Argentina.

mauriciomolto@yahoo.com.ar

Resumen

El rótulo “conflicto del campo” alude a un conjunto de acontecimientos complejos protagonizados por diversos actores durante el primer semestre del año 2008. El trasfondo fue la resolución número 125 del Ministerio de Economía de la Nación, que establecía retenciones móviles a la exportación de soja, maíz, trigo y girasol. Parte fundamental de este fenómeno fueron las muchas personas que organizaron cortes de rutas y campamentos en ciudades y pueblos del interior del país. Estos grupos fueron quienes efectivamente llevaron adelante la protesta y dieron fuerza y capacidad de negociación a las corporaciones agropecuarias nucleadas en la “mesa de enlace”. Por esta razón, se cree necesario analizar los factores que hicieron posible la emergencia de estos pequeños, pero numerosos focos de protesta. Para ello, se analizará la influencia del entorno inmediato de los productores rurales sobre la dinámica del reclamo a nivel local en un escenario específico, teniendo en cuenta la perspectiva de los distintos actores que, voluntariamente o no, se vieron involucrados en los hechos.

Palabras clave: Retenciones móviles; Conflicto del campo; Productores rurales.

Abstract

The expression "conflicto del campo" refers to a complex set of events that involved many people during the first half of 2008. Its background was the sanction of sliding taxes on soy exports. An essential part of this phenomenon was the high number of people who organized the roadblocks and campings outside many cities and towns all across the country. These groups of people were the ones who made possible the demonstrations, gave strength and carried out the negotiations for the agricultural corporations involved. For this reason, it is considered necessary to analyse the factors that made possible the emergence of this small but numerous sources of protest. In order to do that, the influence of the immediate environment of the rural farmers on the dynamics of the protest on a local level in a specific scenario will be analyzed, taking into account the different perspectives of those who, whether voluntarily or not, were involved in these events.

Key words: Sliding export taxes; Argentina's farm row; Rural farmers.

1. Introducción

El rótulo “conflicto del campo” se utiliza para denominar una sumatoria de acciones ocurridas en las esferas política, económica y de la sociedad civil argentina durante el primer semestre del año 2008, que articularon una realidad social compleja. Pasados cinco años desde que se inició el reclamo contra el intento de implementar un esquema de retenciones móviles a la producción agrícola pampeana, la densidad de la agenda política argentina parece haber diluido las consecuencias prácticas de lo que en su momento parecía ser el



final del kirchnerismo. La coalición de fuerzas que venció al oficialismo en el Congreso en el año 2008 no pudo articularse más allá del rechazo al proyecto que pretendía dar fuerza de ley a la Resolución 125. Sin embargo, no debe perderse de vista que desde marzo de 2008 hasta la muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010, la capacidad de acción del Gobierno de Cristina Fernández estuvo condicionada por el resultado adverso del enfrentamiento con el sector rural. Por esa razón, con ánimo de contribuir al esclarecimiento del fenómeno, aquí se analizará un aspecto que hasta el momento no ha sido considerado: las relaciones de colaboración, indiferencia u hostilidad que establecieron los productores rurales movilizados con sus vecinos en las pequeñas localidades que funcionaron como sede de los cortes de ruta y las manifestaciones.

Algunas de las investigaciones precedentes (Barsky y Dávila, 2008; Giarraca, 2008; Revista Lavboratorio, 2008; Giarraca y Teubal, 2010; Aronskind y Vommaro, 2010) se han enfocado en algunos aspectos significativos de esta realidad. Así, se analizaron los hechos considerando las transformaciones en la estructura social agraria y la pluralidad de actores implicados en la economía primaria pampeana; el impacto de los medios de comunicación sobre la opinión pública y, consecuentemente, el devenir de la protesta con la participación de sectores sociales urbanos; la disputa política entre un “bloque oficialista”, a favor de las retenciones móviles, y un “bloque rural” conformado por un variado grupo de actores que, por diversos motivos, se pronunciaron contra la aplicación de la Resolución 125; y la prolongación de las acciones de los ruralistas hasta las elecciones del año 2009 y su impacto sobre la contienda electoral..

Aquí, como punto de partida, se considera necesario distinguir los acontecimientos en el plano nacional de los acontecimientos a nivel local. Los primeros tuvieron como protagonistas a altos mandos del Gobierno nacional, la misma Presidenta y el Vicepresidente, legisladores nacionales, gobernadores de provincia, dirigentes de Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y CONINAGRO, dirigentes sindicales y de movimientos sociales, etc. Todos ellos, actores con capacidad para influir en el desarrollo de la protesta en simultáneo sobre más de un punto geográfico. En cambio, el plano local, mayoritariamente, fue escenario de actores desconocidos por fuera de su pequeño espacio de acción, con influencia acotada a ese lugar. Estos dos planos establecieron una relación de mutua dependencia. El estado de las negociaciones entre la dirigencia rural y los funcionarios de la Presidencia marcó los tiempos de los focos de protesta del interior del país; mientras que los muchos grupos de manifestantes a nivel local (“las bases”, según el discurso de la dirigencia rural) fueron el brazo ejecutor de las decisiones adoptadas por la dirigencia rural y constituyeron su fuente de legitimidad y fortaleza política (Yabrowski, 2010).

Entonces, con ánimo de realizar un aporte a los estudios sobre la temática, interesan el *cómo* y el *porqué* de la protesta a nivel local. Para ello, se cree necesario analizar la relación entre los productores agropecuarios y la dinámica social de las localidades que fueron escenario del reclamo. En consecuencia, surgen los siguientes interrogantes: ¿cómo iniciaron su actividad los focos de protesta contra la Resolución 125?, ¿quiénes fueron sus adherentes?, ¿qué posiciones adoptaron los vecinos de los productores rurales frente al reclamo?, ¿cómo pudo la protesta desarrollarse durante más de cuatro meses sin generar resistencias significativas de parte de actores o grupos locales perjudicados?, ¿por qué hubo personas que sin estar involucradas directamente adhirieron a la protesta?, ¿por qué hubo otras que no lo hicieron?, ¿cómo se canalizó la disconformidad o el rechazo a la medida de los productores agropecuarios? y, finalmente, ¿por qué las iniciativas del *campo* posteriores a julio de 2008 no lograron recrear el clima que existió durante la vigencia de las retenciones móviles?

Este artículo es resultado de una investigación llevada a cabo en la ciudad de Firmat, provincia de Santa Fe, durante el primer semestre del año 2009 (Moltó, 2010). En esta ciudad de alrededor de 20 mil habitantes, situada 100 kilómetros al suroeste de la ciudad de Rosario, se desarrollaron medidas de protesta significativas que se acoplaron a la disputa políticoeconómica que se dio en torno a la suba de retenciones a nivel nacional. A causa de la visibilidad de estas acciones y las consecuencias prácticas que ocasionaron a los habitantes de la ciudad, “el conflicto del campo” fue un acontecimiento que interpeló a la población local prácticamente por entero, obligando a sus miembros a tomar posición frente al hecho. En consecuencia, además de los productores agropecuarios movilizados, las medidas de fuerza involucraron a un número de personas que, sin ser damnificados directos, voluntaria o involuntariamente, se encontraron en medio de la protesta.

La hipótesis general que guía este artículo es que los productores rurales pudieron instrumentar la protesta porque a nivel local existió un entorno social favorable a la misma. En el plano económico, la producción rural y las actividades vinculadas a ella constituyen el factor dinámico de la ciudad de Firmat, principalmente producto del encadenamiento que genera con el sector industrial y de servicios (CEDeT, 2007; Rougier, 2007). Por otro lado, la participación en partidos políticos es relativamente baja (Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, 2006), lo cual significa que no existía una cantidad significativa de militantes o personas con ideología definida capaces de oponerse a los productores rurales con acciones en el espacio público. Además, dado que el origen y el desarrollo histórico de la localidad están ligados a la producción primaria y la agroindustria, estas actividades son parte de la identidad local. Por último, influyeron otros elementos relacionados con la dinámica social de las pequeñas localidades.

Así, en las páginas siguientes se describen las diferentes posiciones que existieron durante el conflicto del campo teniendo en cuenta las interpretaciones que las personas realizaron de esta coyuntura, sus intenciones, las intenciones atribuidas a otros actores y los medios utilizados para lograr su cometido. Se intenta mostrar cómo la economía, la política y la dinámica social local funcionaron como factores habilitantes y limitantes de las distintas posiciones. Además, interesa mostrar cómo la propia dinámica del reclamo generó su oposición a nivel local, e imposibilitó que las acciones que emergieron en rechazo a la Resolución 125 pudieran articularse más allá de ese reclamo.

2. Perspectivas conceptuales

La decisión de establecer un foco de protesta en Firmat afectó al resto de los habitantes de la localidad. La adhesión a *el campo* tomó forma en acciones, es decir, manifestaciones de personas que en distintas oportunidades ocuparon la escena pública para expresar su acuerdo con las medidas de protesta llevadas adelante por los productores agropecuarios de la ciudad, su desagrado general con el Gobierno de Cristina Fernández o su preocupación por la situación de incertidumbre abierta a causa de la puesta en vigencia de la Resolución 125. En cambio, el desacuerdo con *el campo* fue un fenómeno de opinión, o sea un posicionamiento que no se articuló en manifestaciones públicas de rechazo a la protesta de los productores rurales, sino que operó y se propagó a través del plano de los intercambios verbales cotidianos.

Las cinco posiciones que se mencionan en este artículo fueron cinco formas diferentes de interpretar los hechos. Con Erving Goffman (2006), podemos decir que fueron cinco respuestas al interrogante “¿Qué es lo que está pasando aquí?” (p. 9). Conformaron un entramado de posiciones interdependientes en tensión, equiparable a la idea de *figuración* de Norbert Elias (1982). Este entramado, sin embargo, existió en un espacio físico acotado, con alta *disponibilidad de presencia* (Giddens, 1998). De esta forma, puede pensarse la acción de los productores rurales condicionada por un *ambiente* (Melucci, 1999) conformado por las otras cuatro posiciones. Así, durante un lapso prolongado, los portadores de estas interpretaciones, mientras realizaban sus actividades cotidianas, se encontraron cara a cara y, con más o menos vehemencia, de forma respetuosa o no, condicionados por sus trayectorias individuales, sus creencias y las relaciones de poder que los atraviesan, sin proponérselo, protagonizaron una lucha en torno al significado de esa realidad compleja denominada “conflicto del campo.”

Como se dijo anteriormente, para comprender el porqué de estas posiciones se intentará aprehender el “sentido de la acción”. A tal fin, se buscó captar los procesos reflexivos que guiaron prácticas concretas en un tiempo y espacio determinados. Desde este enfoque, el

“sentido de la acción” refiere precisamente a las intenciones manifiestas de la propia acción y a las intenciones atribuidas a acciones ajenas; el juego recíproco de influencia que se da entre las intenciones de la acción individual y las supuestas intenciones de la acción de *otros*. De este modo, desentrañar el sentido de la acción es delinear los principales ejes por los que avanza ese proceso reflexivo.

Si la reflexividad es un proceso, las estructuras son la sustancia procesada. Por lo tanto, para comprender el porqué de las distintas posiciones es necesario considerar las acciones en función de los elementos que funcionaron como marco de referencia. Giddens (1998) define “estructura” (en singular) como “reglas y recursos que recursivamente intervienen en la reproducción de sistemas sociales. Una estructura existe sólo como huellas mnémicas, la base orgánica de un entendimiento humano, y actualizada en una acción” (p. 396). Según este autor, las “estructuras” (en plural) son un “conjunto de reglas-recursos que intervienen en el ordenamiento institucional de sistemas sociales” (Giddens, 1998: 396) El término “sistema” refiere a un “diseño de relaciones sociales por un tiempo y un espacio, entendido como prácticas reproducidas.” (Giddens, 1998: 399).

El *sistema económico* es aquel ámbito de la vida social compuesto por prácticas económicas recíprocas institucionalizadas. Max Weber define *economía* como “una gestión económica autocéfala”; entendiéndolo por “gestión económica”, “un ejercicio pacífico de poderes de disposición, orientado en *primer término* económicamente”. Una acción “económicamente orientada” es toda aquella en la cual “su sentido subjetivo esté orientado por el deseo de obtener ciertas utilidades.” (Weber, 2008: 46). Aquí interesa esbozar una definición del término “economía” acorde al objeto empírico abordado; por lo tanto, la “economía” será entendida como el plano de la vida social en donde acciones pacíficas se orientan por el deseo subjetivo de consecución de utilidades. De este modo, podemos decir que el sistema económico es el diseño institucional de prácticas pacíficas orientadas hacia la consecución de utilidades.

Respecto a la *política*, siguiendo la misma lógica que en la definición anterior, se tomará la definición de Max Weber según la cual debe entenderse por el término “política”, la “aspiración a la participación en el poder o a la influencia sobre la distribución del poder, ya sea entre Estados o, en el interior de un Estado, entre los grupos humanos que comprende” (Weber, 2008: 1056). En paralelo con la definición de sistema económico, entonces, se aludirá al sistema político como el diseño de prácticas tendientes a lograr una participación en el poder o a la influencia sobre su distribución. En relación con esto interesa ver las acciones articuladas dentro y fuera del sistema político, como así también la legitimidad reconocida a los distintos actores políticos por parte de la ciudadanía.

El tercero de los elementos considerados refiere, por un lado, a la existencia de una identidad colectiva, un *nosotros* articulado y definido en relación con una serie de

características específicas. Es la *comunidad* entendida como “una relación social cuando y en la medida en que la actitud en la acción social se inspira en el *sentimiento* subjetivo (afectivo o tradicional) de los partícipes de *constituir un todo*” (Weber, 2008: 33). Esto se complementará con la noción de *sede*: “una región física que interviene como parte del escenario de una interacción, con fronteras exactas que contribuyen a concentrar de algún modo una interacción” (Giddens, 1998: 399). Teniendo en cuenta esta última definición, Firmat será entendida como la sede de una serie de interacciones cuya condición de posibilidad es el alto grado de *disponibilidad de presencia* existente a causa de sus estrechos límites geográficos.

3. Recorte del objeto y metodología de trabajo

En un primer momento, las delegaciones locales de Federación Agraria Argentina y Mujeres Agropecuarias en Lucha organizaron un bloqueo del tránsito en la intersección de las rutas nacional 33 y provincial 93 en consonancia con el reclamo instrumentado por la Mesa de Enlace a nivel nacional. Acto seguido, un importante número de productores agropecuarios respondieron a la iniciativa y el lugar fue tomado como punto de reunión de los afectados de Firmat y pueblos cercanos.

Lo llamativo es que en varias oportunidades acudieron a manifestarse contra la implementación de retenciones móviles personas ajenas a la actividad rural. Por citar uno de los casos más significativos, a fines del mes de marzo de 2008 cerca de cinco mil personas llegaron al emplazamiento del corte de ruta para manifestar su apoyo a los productores agropecuarios (Luque, 2008). Muchos de estos asistentes eran personas nucleadas en instituciones fabriles, comerciales o sindicales, cuya intención fue manifestar preocupación por la situación económica local en tanto trabajadores y empresarios; otros, en cambio, acudieron a solidarizarse con sus vecinos, a quienes consideraban víctimas de un atropello. De cualquier modo, el rápido respaldo obtenido por *el campo* y la estrategia desacertada encarada por el Gobierno de Cristina Fernández ayudaron a legitimar las acciones de protesta ante los habitantes de la ciudad. Sin embargo, también existieron personas que interpretaron el reclamo rural como una medida perjudicial para ellos en particular y la ciudad en general.

Los individuos poseen múltiples adscripciones sociales. Un poco más un poco menos, estos participan de la vida social en sus distintas esferas. Entonces, como resultado del trabajo de campo se construyeron cinco tipos ideales de acción, que si bien no pretenden agotar la variedad de posiciones e interpretaciones sobre los hechos, sí aportan información sobre cómo fue interpretada la situación abierta con la resolución 125 desde diferentes realidades sociales, económicas y políticas.

Los tipos ideales, contrariamente a las acciones empíricas, son construcciones lógicas que tienen por objeto resaltar una porción particularmente significativa de un fenómeno social. Dado que las acciones empíricas son la resultante de múltiples factores, el investigador, de acuerdo con sus objetivos, aísla un número finito de elementos característicos de su objeto empírico y construye una versión particular del fenómeno. Max Weber define la noción de *tipo ideal* como “un concepto *límite* puramente ideal, respecto del cual la realidad es *medida y comparada* a fin de esclarecer determinados elementos significativos de su contenido empírico” (Weber, 2006: 82).

En este caso, las trazas de regularidades de sentido vienen dadas por las intenciones de las acciones de los implicados y las intenciones que estos atribuyeron a los otros actores involucrados. De esta manera, a la luz del concepto “reflexividad”, se construyó una tipología que permite *medir y comparar* algunos aspectos significativos de la *realidad empírica* analizada, los cuales podrán ser utilizados para comprender las diferentes posiciones que existieron en Firmat y realidades sociales equivalentes en el marco del conflicto del campo. De este modo, cada elemento de la tipología presentada en este trabajo expresa una conjunción de significados, razonamientos, intenciones y motivaciones que reflejan las orientaciones y el sentido presentes en muchas acciones. Así, si bien ninguna de las posiciones ideales descritas se corresponde con una acción empírica particular, en función de la mayor o menor presencia relativa de los significados que condensa cada elemento de la tipología puede comprenderse el porqué del comportamiento de actores individuales.

Durante el trabajo de campo se realizaron 19 entrevistas en profundidad, en un proceso de recolección de datos que puede resumirse como una serie de etapas de acercamiento al objeto de estudio. Cada una de las entrevistas fue analizada en función de las tres variables mencionadas anteriormente, las cuales tuvieron un peso relativo diferente en cada uno de los testimonios recogidos. A continuación, entonces, se realiza una breve reconstrucción de las etapas del trabajo de campo y de las características principales de los casos logrados.

En febrero de 2009, de modo exploratorio, fueron entrevistados una empleada administrativa, un ingeniero agrónomo, el propietario de un comercio de venta de semillas y agroquímicos, un transportista de cereales y una mujer que realiza servicios de limpieza domésticos. De estos cinco, los primeros tres manifestaban apoyo a *el campo* y tuvieron una concurrencia intermitente en las actividades de rechazo a la resolución 125, el transportista había participado de las actividades organizadas por el gremio de transporte y los camioneros locales, y la quinta entrevistada no había participado de ninguna actividad ni tampoco manifestaba adhesión a ninguna de las partes en pugna. Respecto de la esfera política, el comerciante militó en las filas del justicialismo hasta inicios de la década del '90 y la mujer que trabaja por cuenta propia dijo estar afiliada al Partido Demócrata Progresista; los tres restantes no manifestaban simpatía por ningún partido en particular.

La primera fase del relevamiento permitió identificar dos posiciones (“apoyo”/ “no apoyo”). En su momento se pensó que estos diferentes puntos de vista podían explicarse a causa de la actividad económica de los agentes. De este modo, se consideró que apoyar o no a los productores rurales dependía del vínculo económico existente entre los distintos agentes económicos y el sector primario. Con esta idea fue que se abordó la segunda etapa del trabajo de campo durante parte del mes de marzo.

Allí se realizaron otras cinco entrevistas. En esa ocasión, los entrevistados fueron un productor agropecuario autodenominado “mediano”, dos trabajadores por cuenta propia, una docente de primaria y un empresario forrajero italiano cuya empresa tiene una de sus sedes en Firmat. De estos cinco casos, sólo el productor agropecuario tuvo participación activa en las actividades de rechazo a las retenciones móviles. Mientras, el empresario forrajero y los dos cuentapropistas opinaban negativamente respecto a la protesta de los productores rurales, y la docente no se mostró simpatizante ni del Gobierno ni de los productores agropecuarios. Entre estos casos, por entonces, ninguno tenía participación política; tampoco manifestaban una ideología definida.

Las nuevas entrevistas, en parte, apoyaban la hipótesis de que la actividad económica de las personas había influido de forma determinante en las interpretaciones realizadas sobre *el conflicto del campo*. El hecho de que el productor agropecuario hubiera participado de los cortes de ruta y no la docente y los dos cuentapropistas avalaba esta hipótesis, pero la opinión del empresario forrajero la contradecía. Esta situación llevó a pensar que el hecho de que el entrevistado fuera de nacionalidad extranjera y estuviese allí sólo por negocios pudo haber influido también de manera importante en la interpretación de la situación. Así fue como se decidió incorporar una nueva variable: la pertenencia o no al medio social local; una forma de distinguir entre “miembros” y “no miembros”. Hasta el momento, este factor no había sido tenido en cuenta, ya que si bien algunos entrevistados habían migrado a la ciudad durante su vida adulta, lo hicieron desde localidades vecinas o de características similares a Firmat. Por esa razón, se decidió incluir a los entrevistados de localidades o pueblos vecinos en la categoría “miembros” y a personas originarias de regiones extrapampeanas en el grupo “no miembros”.

En una tercera etapa, en abril, se realizaron 8 entrevistas más. Esta vez, los entrevistados fueron un pequeño productor agropecuario con menos de 10 hectáreas, un profesional universitario vinculado a la fabricación de maquinaria agrícola oriundo del Gran Buenos Aires, un empleado administrativo de una empresa de servicios de salud, un obrero industrial empleado en un establecimiento de fabricación de maquinaria agrícola, un estudiante universitario, la esposa de un productor agropecuario, una persona dueña de un pequeño taller de reparaciones de cubiertas de vehículos automotores y un exobrero metalmeccánico dedicado a proveer servicios de chapería y pintura.

El pequeño productor, la mujer esposa de productor agropecuario y el obrero industrial habían participado de las actividades de rechazo a las retenciones móviles; el estudiante universitario se manifestaba a favor de *el campo*; y el empleado administrativo podría catalogarse como un adherente crítico. Mientras, por otro lado, el profesional universitario vinculado a la fabricación de maquinaria agrícola, el chapista y el dueño del comercio de reparación de neumáticos se pronunciaron en desacuerdo con las medidas llevadas a cabo por los productores agropecuarios.

De estos ocho casos, sólo dos estaban vinculados a la política. El chapista era por entonces militante del PJ y adherente al Frente para la Victoria, y el profesional universitario había militado en las filas del FREPASO hasta el triunfo de de la Rúa en las internas del año 1999. La lectura de estos testimonios permitió considerar la filiación política o ideológica de los entrevistados como variable independiente. En función de ello, se realizó una relectura del total de las entrevistas hechas hasta el momento.

Finalmente, en mayo de ese mismo año se realizó la última de las entrevistas mencionadas. En esa ocasión, el entrevistado fue un comerciante gastronómico del noroeste del país radicado en Firmat desde el año 2007. Esta persona manifestaba adhesión a *el campo*, pero no había participado de ninguna actividad de rechazo a las retenciones. Tampoco adhería a ninguna idea política particular desde que terminó su militancia en la Juventud Peronista en el año 1974. Articulaba un discurso fuertemente antipolítico que eclipsaba sus opiniones sobre la problemática de las retenciones. Su relato permitió cerrar el trabajo de campo que se utilizó como insumo para las interpretaciones que hoy se resumen en este artículo.

4. Posiciones

Los productores rurales “tradicionales”

Cristina le tiene odio al campo. Lo que quiere es que desaparezca el colono chico, a ella no le importa. Después te vienen los *pooles* de siembra y te pagan lo que quieren porque vos te vas a ver obligado a pagárselo, y esos *pooles* de siembra no te pagan impuesto, no pagan nada, y te alquilan 100 mil hectáreas. No hacen nada, los tipos andan empilchados y te ganan un quintal o dos de más por hectáreas, porque no es lo mismo si tenés 10 hectáreas para trillar que tener 10 mil.” [*Productor agropecuario, 50 años. Firmat, marzo de 2009*]

Bajo la denominación “productores rurales ‘tradicionales’” pretende agruparse una serie de rasgos típicos encontrados en las entrevistas realizadas a actores económicos directamente afectados por las retenciones móviles. Aludir a este tipo de actor como “productor rural tradicional” es una forma de recuperar las propias categorías mediante las cuales los entrevistados se ubicaron frente a otros actores vinculados a la producción agrícola, principalmente los *poools* de siembra. Esto no significa que exista en este trabajo una caracterización rigurosa que permita definir si un productor es o no “tradicional”, sino que es

una forma de describir interpretaciones que realizaron los actores sobre su situación y la de otros agentes económicos involucrados en esta trama de acciones. De hecho, la distinción entre productor tradicional y *pool* de siembra es una categoría hasta tal punto artificial, que incluso los autodenominados “productores tradicionales”, durante las entrevistas, relataron prácticas económicas propias que los acercaban bastante a la realidad de los *pools* de siembra.

En Firmat, el aquí llamado “productor tradicional” fue el participante más activo de los cortes de ruta contra las retenciones móviles. Su interpretación de los hechos atribuyó al Gobierno nacional la intención de querer arrebatarle la tierra. Según esta perspectiva, de seguir la situación como hasta entonces, el “productor tradicional” no iba a tener otra opción más que alquilar su propiedad a un *pool* de siembra. Siguiendo el razonamiento, luego, el Gobierno acordaría con los *pools* de siembra una suba mayor en la alícuota de retenciones. Desde esta óptica, la jugada era posible porque los *pools* de siembra serían grandes actores que podrían hacer frente a la suba de retenciones. De este modo, el Gobierno obtendría mayor cantidad de ingresos y los *pools* de siembra, mayor rentabilidad a causa de la adquisición o arrendamiento de una mayor superficie. Así, este actor, a pesar de que de hecho confluyó con los *pools* de siembra y los grandes productores agropecuarios en una misma causa, se vio acorralado por dos fuerzas que lo excederían poder.

Desde esta interpretación, los *pools* de siembra serían manejados por hombres de negocios, cuya intención sería hacer cada vez más dinero. Este dinero, a diferencia de sus ganancias, no sería reinvertido en la localidad. Entonces, los *pools* de siembra perjudicarían a toda la localidad, ya que no reinvertirían sus ganancias allí. Sobre la base de este razonamiento, el productor rural tradicional reclamaba a la comunidad mayor participación y empatía con el tema de las retenciones, ya que durante la protesta contra la resolución 125, a pesar de las muchas manifestaciones de apoyo recibidas, no se sentía lo suficientemente acompañado. Producto de esta situación, se realizaban la siguiente pregunta: ¿por qué la gente no hace propio nuestro reclamo? La respuesta no fue que quienes estuvieran en desacuerdo actuarían de ese modo por ser kirchneristas o simpatizar con el Gobierno nacional, sino que la causa era ubicada en el plano de pasiones como la envidia y/o el resentimiento, o simplemente el desconocimiento.

Ahora, teniendo en cuenta esto, cabe preguntarse respecto del porqué de esta acción y forma de ver las cosas: ¿por qué, desde este punto de vista, las retenciones son injustas?, ¿por qué se percibe la Resolución 125 como una jugada del Gobierno para arrebatarle la tierra?, ¿por qué se opina que el universo de quienes simpatizan con el Gobierno nacional básicamente se reduce a “cómplices” y “envidiosos”?, ¿por qué percibe que el apoyo de la localidad no fue suficiente?

Políticamente, se descarta que antes del conflicto del campo los productores rurales, en su conjunto, hubieran sido antikirchneristas. El rechazo a la resolución 125 fue una acción cuyas principales premisas fueron tomadas del sentido común; una mirada sobre la política y la intervención estatal como un factor que los afecta negativamente. Es una posición fuera de la política que desconfía, incluso, de los políticos que apoyaron el reclamo.

Económicamente, si se hubiesen aplicado, las retenciones móviles no hubieran significado para el productor agropecuario una baja en su rentabilidad. Según Barsky (2008), en octubre de 2007, cuando ya había comenzado la siembra de soja, el precio FOB de este cultivo era de 364 dólares la tonelada. En marzo de 2008, al momento en que se sancionó la Resolución 125, el precio de la soja era de 590 dólares la tonelada. Las retenciones móviles significaban por entonces un incremento de 9% (equivalente a una disminución del 9% en el margen bruto), mientras que el precio del cultivo se había incrementado un 61,7%; es decir que en definitiva, con retenciones móviles incluidas, en marzo de 2008, el productor obtenía un margen bruto potencial 52,7% superior al que esperaba obtener al momento de la siembra, habiendo pagado en octubre/noviembre de 2007 —a precios de octubre/noviembre de 2007— todos los insumos relacionados con el proceso de producción, excepto los gastos de cosecha. Otro dato significativo es que durante el primer semestre de 2008 las exportaciones de soja fueron récord. Esto significa que, a pesar de que el cese de comercialización estaba en vigencia, la comercialización de granos continuó. Según datos del Ministerio de Economía de la Nación, el valor de las exportaciones agroindustriales aumentó en este período 43% respecto a igual período del año 2007, mientras que su volumen sólo se redujo 1%. Finalmente, hay que tener en cuenta el aumento de la propiedad de la tierra y los precios de arrendamiento durante el período postconvertibilidad (Barsky, 2008; Aronskind, 2010). En el año 2002, el valor de la hectárea en la zona era de 2.692 dólares, mientras que en el año 2007, era de 8.700 dólares (Barsky, 2008: 337), lo que equivale a un incremento patrimonial de 323,2%. En este marco, para un productor agropecuario —sea pequeño o grande— la Resolución 125 no sumó problema alguno sino que, en todo caso, capturó una parte de la ganancia extra que aquel esperaba obtener a raíz del incremento de los precios internacionales. Esto no significa que no existieran productores rurales con problemas económicos, sino que las retenciones móviles no ocasionaban ningún problema que no hubiera existido previamente a la medida. Sin embargo, su discurso expresaba una posición muy distinta, ya que afirmaron que a causa de las retenciones móviles su situación era crítica.

Según la perspectiva de los productores rurales tradicionales, la protesta contra las retenciones móviles fue protagonizada por “pequeños y medianos productores”. Así, percibieron a todos los manifestantes contra la Resolución 125 iguales entre sí e iguales respecto de sí mismo. En esta línea, los únicos actores dedicados a la producción

agropecuaria con un reclamo ilegítimo fueron los *pools* de siembra. Frente a esta figura, el rótulo de “medianos y pequeños” adquiere cohesión interna. Poco importaba la cantidad de hectáreas que acreditaban a un productor rural como “mediano” o “pequeño”, ya que la ambigüedad de la categoría ocasionó que los “grandes productores” siempre fueran *otros*.

La figura del *pool* de siembra funcionó también como “chivo expiatorio”. La situación de alta rentabilidad de la producción de soja era por entonces —al igual que hoy— algo innegable; entonces, si desde esta óptica los pequeños y medianos productores estaban atravesando una crisis, era necesario señalar quién estaba capitalizando la rentabilidad creciente del sector primario. Es allí que entró a jugar la figura del *pool* de siembra. En este marco, los productores movilizados presentaron su posición como una resistencia al avance de los *pools* de siembra y una defensa de la comunidad. Mientras, por otra parte, el Gobierno nacional estaría siendo partícipe necesario de una estrategia concentradora, ya que la Resolución 125 tendría la intención de disminuir el número de pequeños y medianos productores para así poder negociar con los productores grandes una suba mayor de las retenciones. Así, la supuesta complicidad entre el Gobierno y los *pools* de siembra acrecentó el enojo de los productores agropecuarios.

La trayectoria de estos actores se enmarca en un medio social donde el trabajo manual (actual o pasado) es la actividad que legitima la propiedad. Por lo tanto, consideraban que el 100% del valor de la producción de soja les pertenecía. La figura del Gobierno, en este marco, fue percibida como la de un agente que arbitrariamente se quedaba con su propiedad. Hasta el 11 de marzo, existía la certeza de que el 65% de la producción de soja se hallaría libre de retenciones, pero con la puesta en marcha de las retenciones móviles ya no se podía estar seguro de eso. Si se considera, además, que quienes pretendían quedarse con cerca de la mitad de su trabajo eran actores políticos, dado el importante rechazo que suscita la figura de lo que Max Weber denominó *político profesional*, la situación se tornaba intolerable. Por ello, a este actor le resultó imposible reconocer legalidad a esta medida. De este modo, la indignación y la bronca operaron motivando la acción, mientras que la intención fue recuperar su propiedad.

Es cierto que algunos productores arrendaban sus tierras y contrataban servicios para la producción, pero desde esta posición, la situación sería consecuencia de la supuesta crisis por la que estaría atravesando el productor tradicional, principalmente el pequeño. Además, aceptan que su situación laboral permite ciertos privilegios que no tendría el trabajador asalariado, pero desde su perspectiva esa situación es una recompensa por su trabajo pasado. De esta forma se contestó a los detractores de la protesta, quienes, paradójicamente, deslegitimaban los cortes de ruta aludiendo a las altas ganancias y la relativamente flexible rutina laboral actual de los productores rurales. Entonces, se ve cómo la premisa “propiedad=trabajo” es un tópico de sentido común que distintos actores utilizaron

tanto para justificar como para deslegitimar las medidas de fuerza de los productores rurales.

Si bien lo desarrollado hasta ahora puede considerarse una explicación verosímil en el plano de la motivación y la intención, se cree que no alcanza a explicar cómo fue posible que este actor lograra llegar tan lejos. No alcanza a explicar, por ejemplo, cómo fue posible que los productores rurales dispusieran a su antojo el tránsito a través de la ciudad; o dicho de otra forma, cómo fue posible que este actor lograra administrar el paso por la localidad durante meses sin encontrar resistencia significativa. La explicación a esto último debe buscarse en la concepción de la localidad, el rol asignado a la producción agropecuaria por parte de todos sus habitantes y el mandato de solidaridad entre vecinos.

En Firmat existe una fuerte asociación de la vida económica local con la producción primaria. Esta percepción de la localidad, de alguna manera, encuentra su fundamento en el tipo de actividad del entramado de instituciones económicas que funcionan en ella. Sobre esta base, los afectados por la Resolución 125 desestimaron sin más los perjuicios ocasionados a la localidad porque estaban convencidos de que su problemática era una cuestión de primera necesidad para toda la ciudad. Hasta tal punto lo creyeron así, que a pesar de que parte importante de la localidad participó de los cortes de ruta, caravanas en coche, cacerolazos, movilizaciones y actos públicos, en su opinión el apoyo recibido no fue suficiente.

El convencimiento del productor rural tradicional de ser condición necesaria y suficiente para la vida económica local permitió instrumentar, prácticamente sin contemplación, acciones que fueron perjudiciales para el resto de la ciudad. Si de una u otra manera creyeron que toda la actividad económica de la ciudad sería posible gracias a el *campo*, desde esta perspectiva ¿cuán importantes podrían ser los problemas ocasionados a la ciudad si lo que estaba en juego era la rentabilidad del motor económico local?, ¿cuán importantes podrían ser la interrupción momentánea del tránsito, el recorte de horas laborales en la industria metalúrgica, los problemas laborales ocasionados a los transportistas de cereales o la falta de algunos productos de consumo masivo frente a la problemática del *campo*? La respuesta, desde esta lógica, fue que todos esos inconvenientes eran poco importantes, ya que si *a el campo* le iba mal, tarde o temprano a toda la ciudad le iría mal. Por lo tanto, dada esta situación, lo más importante era que *a el campo* le fuera bien; es decir, que las retenciones bajaran.

Los actores económicos apoyan al sector rural

Al corte fuimos las dos fábricas, todos fuimos. Estaban los camiones parados en la ruta, autos, de todos lados había... Y bueno, como te digo yo, los que perdemos somos nosotros. Los del campo ellos a la larga siguen bien igual. Nosotros no

estamos en contra de nadie, estamos a favor de que esté todo bien. Entonces nosotros los tenemos que apoyar a ellos cueste lo que cueste porque si no fuera por ellos no tenemos laburo, porque no compran máquinas, no compran nada. Pero nosotros cada vez que tenemos que pedir un aumento, el obrero, el que sea, tenés que luchar como loco para que te lo den. [*Obrero metalúrgico, 50 años. Firmat, abril de 2009*]

Existieron asalariados, comerciantes, empresarios y cuentapropistas que se movilizaron contra la Resolución 125. Casos paradigmáticos de este tipo de acción fueron los obreros de la industria metalmeccánica y los transportistas de cereales, aunque las descripciones que ofrecemos tienen la intención de presentar interpretaciones típicas de manifestantes que, si bien no estaban afectados directamente por las retenciones móviles, creyeron que debían movilizarse para defender su propio trabajo.

Según las opiniones que permitieron la construcción de esta posición, que bien podría denominarse como “actor vinculado económicamente”, la situación económica local era óptima antes de marzo de 2008. Por lo tanto, no se movilizó ni contra el Gobierno nacional ni a favor del *campo*, sino que desde esta posición se percibió la situación de tal modo que se sintió ser el principal damnificado. Por esa razón, dado que la protesta de los productores agropecuarios repercutió directamente sobre su fuente de trabajo, ante la situación de *incertidumbre* abierta el 11 de marzo.

El “actor vinculado económicamente” participó de los hechos en calidad de trabajador, empresario y/o socio de sindicatos y cámaras empresariales, ya que acudió al llamado de solidaridad del *campo* desde las instituciones en las cuales estaba inserto. Tal vez el más importante de ellos haya sido el Centro Económico Firmat (CEF), institución que cuenta con 250 socios y nuclea los principales comercios e industrias de la ciudad, y algunos establecimientos dedicados a la producción primaria. El CEF fue un participante activo en el rechazo a las retenciones móviles. De hecho, su presidente y algunos miembros fueron oradores en uno de los actos realizados en el centro de la ciudad contra la Resolución 125 en junio de 2008 (Amaya, 2008). Así, las acciones públicas de apoyo a *el campo* más importantes estuvieron enmarcadas en la decisión estratégica de los principales actores económicos de encolumnarse tras el reclamo rural. En ese sentido, el concepto de *integración sistémica* aplicado a la economía local ayuda a entender la existencia de este tipo de manifestante.

El concepto de *integración sistémica*, como se dijo en la Introducción, refiere a la reciprocidad de prácticas entre actores o grupos de actores que trascienden la situación de copresencia. Esto significa que la coordinación de las prácticas entre los actores A y B se extenderá en el tiempo y en el espacio. Algunas relaciones económicas sirven como ejemplo para ilustrar prácticas integradas por fuera de los límites espaciotemporales de la interacción. En este caso, tomando uno de los establecimientos dedicados a la fabricación

de maquinaria agrícola, encontramos a cada uno de los 600 trabajadores de la fábrica operando en un sector de la cadena de producción. No es necesario que todos los trabajadores estén ubicados en el mismo lugar y a la misma hora para que el proceso productivo funcione, sino que el producto terminado es resultado de la coordinación de diferentes actores ubicados en distintos sectores de la planta. Lo mismo vale para la cadena de comercialización. No es necesario que el comprador encargue personalmente el producto sino que en todo caso se dirige hacia un concesionario y realiza allí la transacción comercial. La producción en la empresa marcha independientemente de las necesidades puntuales de una persona en particular y la demanda por parte de los clientes tiene también una dinámica propia, pero ambos lados del intercambio —oferta y demanda— se encuentran coordinados de tal modo que a lo largo del tiempo y el espacio, unos producen y los otros compran.

En líneas generales, este ejemplo puede aplicarse prácticamente a toda la cadena de intercambio económico, pero la estabilidad de la reciprocidad de las prácticas de intercambio puede variar de acuerdo con la actividad económica. Existen sectores en los que las prácticas de intercambio son constantes y predecibles, mientras que en otras actividades no. Por otro lado, debe tenerse en cuenta otro factor: la pluralidad o la exclusividad de vínculos. Siguiendo con el ejemplo de la industria de maquinaria agrícola, los principales destinatarios son los agricultores (locales, nacionales y mercados de exportación); mientras que, por ejemplo, un comercio de indumentaria textil potencialmente podría establecer vínculos comerciales prácticamente con toda la ciudad. Por otro lado, la industria de maquinaria agrícola o un comercio de indumentaria textil tienen un horizonte de mayor previsibilidad que un trabajador por cuenta propia dedicado a la reparación de instrumentos domésticos o la venta de productos puerta a puerta. De este modo, retomando el razonamiento de Durkheim en *La división del trabajo social* (2008), puede decirse que a mayor reciprocidad mayor previsibilidad; pero también, que a mayor reciprocidad mayor dependencia. De este modo, a causa de la integración de las actividades, cada una de ellas se vuelve más sensible a las dificultades de la otra. Esto último ocasionó que algunos actores económicos hayan experimentado el conflicto del campo con mayor preocupación que otros.

La actividad de transportistas de cereales, entre marzo y julio de 2008, fue intermitente. En esos meses, estos actores pudieron trabajar sólo en los intervalos en los que los productores rurales levantaban los cortes de ruta. Por otro lado, a algunos obreros metalmeccánicos les suspendieron las horas extras, y los despidos se evitaron gracias al plan REPRO (Programa de Recuperación Productiva implementado por el Gobierno nacional), solicitado por 14 empresas en Firmat (Zenclussen y Neffen, 2009). De este modo, prácticas económicas mayormente integradas a la producción agropecuaria, a causa de la interrupción ocasionada por los productores rurales, también se interrumpieron. Esta situación provocó que gran parte de la ciudad fuera directamente afectada.

En marzo de 2008, el “actor vinculado económicamente” no podía saber cuáles serían las consecuencias del conflicto; sólo anticiparse a los potenciales efectos percibidos. Con el correr de los días, el significado de la protesta rural fue variando. Según los acontecimientos del día a día, se reinterpretaron el pasado reciente y el porvenir. En este contexto, de seguir las cosas como hasta entonces, la situación provocaría desempleo e importantes caídas en la rentabilidad de las empresas. A la luz de los hechos, desde esta posición, fue verosímil pensar que la problemática instalada alrededor de las retenciones móviles podía profundizarse. Por esa razón, este tipo de personas se percibieron como los mayores damnificados.

En esta línea, entonces, si bien gran parte de las movilizaciones de apoyo a los productores rurales locales fueron organizadas y motivadas por instituciones y organizaciones, el “actor vinculado económicamente” se plegó al reclamo de los productores rurales con la intención de contribuir a dar fin a una situación que les había generado incertidumbre. La sola posibilidad de desempleo y de pérdidas económicas puso en duda la continuidad de las actividades llevadas a cabo hasta el momento y las planificadas a futuro; produjo una sensación de que mañana podría ser peor. Por esa razón, desde esta posición, la situación de los productores agropecuarios o las actitudes del Gobierno nacional quedaron en un segundo plano. Entonces, fue en función de esa sensación de vulnerabilidad y urgencia que se manifestaron con un objetivo claro: la vuelta a la “normalidad”; es decir, que la situación social y económica en la localidad volviese a ser lo que era justo antes del inicio del conflicto del *campo*.

A modo de síntesis, puede decirse, la movilización contra la Resolución 125 por parte de personas cuyas prácticas económicas están integradas con la producción rural se estructuraron en el sistema económico local. En este contexto, la motivación fue la incertidumbre, mientras que el objetivo fue volver a la situación económica previa al 11 de marzo. En el plano del discurso, estos actores se ubicaron como los principales damnificados, una especie de daño colateral. De este modo, puede decirse que gran parte del apoyo económico recibido por el *campo* provino de un tipo de actor que se manifestó estratégicamente por sus intereses.

Los ecos del “que se vayan todos”

En un pueblo chico como este, vos imagináte que es medio difícil que alguien diga que está a favor del Gobierno. Por supuesto que algunos resentidos dicen, ‘no, los gringos se compran todo, está bien que dejen la plata, está bien el descuento’... Entonces yo les digo: ‘¿a vos, te gustaría que de tu sueldo te hagan una retención para repartir entre los pobres y que vos no sabés dónde va la plata?, ¿te gustaría?’ A nadie le gusta que le metan la mano en el bolsillo, menos sin saber para qué. [Empleada administrativa, 60 años. Firmat, marzo de 2009]

Aquí se intentará comprender por qué parte de la ciudadanía aprobó y justificó enfáticamente el accionar de los productores rurales, y por qué la crítica de esas personas apuntó contra el Gobierno nacional y no contra quienes intencional y abiertamente bloquearon el paso; es decir, por qué frente a los cortes de ruta se responsabilizó al Gobierno nacional y no a quienes efectivamente interrumpían el tránsito. Para caracterizar esta posición, entonces, se utilizará el rótulo de “antipolítico”.

El “antipolítico” adhirió al reclamo rural y enfocó sus críticas en la figura de *los Kirchner*. Desde su lógica, la situación por las retenciones móviles fue simplemente otro indicio de la actitud prepotente y autoritaria del kirchnerismo. Sus opiniones mencionaron negativamente temas y medidas de gobierno vinculados a la nacionalización de las AFJP, la Ley de Medios Audiovisuales, el patrimonio de Néstor Kirchner, los Derechos Humanos o la inseguridad; lo cual hace pensar que estas personas, antes que apoyar a *el campo*, estuvieron contra el Gobierno nacional. Desde esta mirada, se percibió a *los Kirchner* como “soberbios”, “autoritarios” y “confrontativos”; una especie de depredador irracional cuyo fin último sería quedarse con las riquezas del país, tal como en su momento habrían hecho en Santa Cruz. Puntualmente, las retenciones móviles serían sólo una medida para “hacer caja”, y “la caja”, un instrumento de disciplinamiento político. Desde esta óptica, si el conflicto del campo alcanzó niveles altos de confrontación, la responsabilidad no es de los productores rurales, ya que el autoritarismo y la intransigencia del Gobierno no les habrían dejado otra opción. Sin embargo, a pesar de que estos actores cumplen con todos los requisitos para ser catalogados como antikirchneristas, su crítica no sólo se enfocó en *los Kirchner*, sino que se extendió hacia el resto de la dirigencia política.

El “antipolítico”, al mencionar insistentemente el tema de “la caja”, pretendía denunciar la compra de voluntades que supuestamente realizaría el Gobierno nacional a cambio del giro de fondos federales hacia las provincias. De este modo, se apuntaba también contra gobernadores y legisladores nacionales. Desde esta lógica, “la caja” explicaría por qué ciertos legisladores nacionales apoyaron las retenciones móviles y, también, por qué muchos gobernadores se alinearon con el Poder Ejecutivo Nacional durante la protesta agraria. Si bien las acusaciones son contra los Kirchner, la percepción de quienes serían “comprados” por el Gobierno no es mucho mejor que la mirada sobre quienes estarían “comprando”.

En la opinión sobre los Kirchner, se *actualizan* percepciones que tienen por objeto a la totalidad de la clase política. Se impugnó la actividad política porque los políticos no cumplirían con la ley. Mientras tanto, en oposición a estos últimos, los ciudadanos “comunes” deberían acatar todas y cada una de las reglas; de lo contrario, enfrentarían la

sanción del Estado. A esto se suma que los políticos son funcionarios públicos, cuyos sueldos son pagados por la gente “común”. Entonces, en este marco, los políticos no sólo vivirían muy bien a costa del trabajo de la ciudadanía, sino que este nivel de vida sólo sería posible porque tendrían posibilidad de moverse por fuera de los márgenes legales.

Siguiendo a Auyero (2002), estos datos permiten decir que se interpretó la situación a la luz de la dicotomía *ciudadanía / dirigentes políticos*. En la percepción de estos autores, la gente que trabaja, es decir, quienes están insertos laboralmente en el sector privado de la economía, quienes no reciben subsidios, no son empleados del sector público y, por supuesto, quienes no se dedican a la política, serían quienes pagarían el sueldo de los políticos, los gastos del Estado, los subsidios, etc. Por lo tanto, percibieron a los productores rurales como damnificados que se movilizaron en defensa de su propiedad, e incluso, ellos mismos se vieron como potenciales damnificados del supuesto autoritarismo y la supuesta depredación kirchnerista.

Razonamientos similares podrían encontrarse en los movilizados a favor del *campo* en los grandes centros urbanos del país y en otras manifestaciones contra este y otros gobiernos. De hecho, la mayoría de estos tópicos circularon densamente por los principales medios de prensa de alcance nacional (Vommaro, 2010; Cremonte, 2010). Pero, en última instancia, se cree que este tipo de interpretaciones pueden entenderse como una consecuencia de la crisis de legitimidad de los partidos políticos, cuya máxima expresión se dio sobre finales del año 2001 (Sidicaro, 2008).

Sin embargo, llama la atención que el descrédito de la política no afecta en la misma medida a la política local. Tal vez se deba a que las declaraciones de los políticos locales recurrieron también a tópicos como “la soberbia del Gobierno”, “el *campo* como base de las economías del interior del país”, “estar con el *campo* es estar con la gente y el interior”, “el conflicto por las retenciones móviles se resuelve con sentido común”, “la falta de vocación de diálogo del Gobierno nacional”, “el carácter abusivo de las retenciones”, etc.

Teniendo en cuenta esto, bien podría pensarse que fueron los actores políticos de Firmat quienes lograron encolumnar a la ciudadanía local; sin embargo, es verosímil la situación inversa; es decir, que fue el sentido común de la ciudadanía lo que proveyó herramientas discursivas a los políticos locales. Esto explicaría por qué su postura frente a las retenciones móviles, contrariamente a la del resto de los políticos, fue considerada positiva. El Gobierno nacional y sus aliados fueron percibidos como representantes de un interés contrario al de la ciudadanía o el pueblo; mientras que los legisladores y los Gobernadores estarían disciplinados por “la caja” del Gobierno. En ese marco, la actuación de los mandatarios locales y de la zona emerge como el único sector del sistema político con cierto nivel de legitimidad. En síntesis: la motivación de este actor fue la indignación producto de la identificación con la problemática de los productores rurales. Sintieron que eran iguales a los

productores rurales, que padecían sus mismos problemas. Su intención fue poner “límites” al Gobierno nacional en particular, pero también a todos los políticos en general, sintiéndose parte de una ciudadanía que decidió decir “¡basta!”. Finalmente, su discurso expresó un alto grado de satisfacción respecto de los resultados del conflicto del *campo*, ya que presumían que era el final del kirchnerismo; una victoria de los “ciudadanos comunes” frente a los políticos.

Los apoyos al Gobierno nacional

¡Está lleno de delincuentes! ¡Son empresarios! Te dicen: ‘¿está mal ganar dinero?’; entonces vos decís: ‘no, no está mal ganar dinero, ahora el problema es cómo lo ganás al dinero’. Si para ganar dinero vos le estás quitando guita al Estado en donde no hay hospitales, no hay escuela... o estoy sacando la guita para justicia, para lo que sea... No es bueno o malo ganar dinero, depende cómo lo ganes, viste. Entonces, si un tipo gana obscenidades ¡está bien que el Estado le caiga!... ¡Y se lavan las manos! O sea, los exportadores hacen cualquier joda y no pasa nada, nadie se enoja con los exportadores. Ningún productor le dice a Monsanto: ‘¡che, loco, el Round Up vale un montón de guita y me estás cagando! ¡Y encima me estás contaminando el suelo!’ No, al Estado: ‘bajame las retenciones’. Ahora, mantené la misma calidad de servicio: quiero rutas de la puta madre, quiero la policía eficiente para que me cuide mis bienes y todo lo demás. [*Graduado universitario, 48 años. Firmat, Abril de 2009*]

A pesar de que la situación abierta con las retenciones móviles produjo un clima muy desfavorable al kirchnerismo, entre los entrevistados hubo personas que consideraron positivamente la medida. Esta mirada se erigió por encima de la inserción económica personal, ya que al margen de que tuvieran o no relación con el sector agropecuario, en la percepción de los hechos tuvieron mayor peso relativo convicciones o principios de tipo ideológicos, y realizaron una lectura política de los hechos.

Esta posición es la antítesis de las interpretaciones descriptas anteriormente. Mientras en aquellas se apoyó al sector rural y se impugnó la totalidad de la política, desde este punto de vista se reconocieron diferencias al interior del campo político y se tomó posición.

Mientras los productores rurales se perciben como “pequeños productores” perjudicados por la política oficial, desde esta mirada los llamados “pequeños productores” serían un actor secundario en el negocio de la soja. Por ese motivo, esta interpretación focalizó su crítica en los grandes productores de soja, el sector exportador, los fabricantes de fertilizantes y agroquímicos, etc. Se mostraron de acuerdo con la intervención estatal sobre la economía por considerarla una herramienta legítima de política económica y, precisamente, vieron en las retenciones móviles un buen mecanismo de financiamiento del Estado. En su lógica, el fisco debería apuntar a los grandes exportadores y los actores principales del “agronegocio”. En esta misma línea, los pequeños productores, con su acción, tendrían la intención de obtener mayor rentabilidad; pero, dado que serían “actores de reparto”, estarían

beneficiando a los grandes productores y empresarios rurales. Esto tendría como principal efecto el aumento de la concentración de riqueza y la configuración de un modelo productivo simple, basado principalmente en el cultivo y procesamiento de soja. Se vio también cómo esta postura consideraba legítima y favorable la intervención del Estado, colocando en el mismo plano al poder político y al poder económico. Así, la intención del poder económico sería, naturalmente, la acumulación de riqueza; mientras que el Estado buscaría obtener parte de esa renta para volcarla sobre la sociedad.

En lo que toca a las consecuencias del enfrentamiento por la resolución 125, aquí también se señalaron los perjuicios ocasionados por la protesta en el plano económico; pero la responsabilidad es atribuida tanto a *el campo* como al Gobierno. Sin embargo, el Gobierno no fue visto como un déspota irresponsable que intencionalmente buscó “enfrentar” a la sociedad, sino que atribuyeron la magnitud del conflicto a los errores cometidos en la negociación y a las contradicciones internas del kirchnerismo y de la alianza política que había llevado a Cristina Fernández a la Presidencia en 2007.

Esta posición resume las interpretaciones de personas que se opusieron al conflicto del campo desde la primera hora, que se percibieron como una contada excepción frente a una mayoría que simpatizaba con *el campo*. Son opiniones a favor del Gobierno nacional a pesar de la presión ejercida por el medio social local; realizan una defensa de algunas de las principales políticas implementadas por el kirchnerismo desde el año 2003, principalmente en materia económica y de derechos humanos, y por lo tanto expresan también el temor de que se generara un retroceso en relación a cuestiones consideradas como aciertos del kirchnerismo. Sin embargo, a causa de la amplia legitimidad con la que contaba *el campo*, sus opiniones no encarnaron en acciones públicas concretas de apoyo al Gobierno nacional.

La crítica y el fastidio

Los del campo las quieren todas porque dicen que el país se mueve alrededor de ellos ¿Y un médico que abre y saca un corazón y le pagan con un papelito?, ¿una enfermera? que atiende un hospital y gana 2 lucas, una maestra; un policía, que le dan un revólver y no le dan para las balas... viste, qué sé yo. Quién tiene la culpa y cómo se soluciona no tengo ni idea... Estuvieron 150 días sin laburar. Yo si no laburo 150 días, el piojo más chico me lleva a caballo. Ahora qué protestan, qué quieren, qué no quieren, sólo ellos lo saben. Pero yo ya te digo, no es lógico lo que hicieron. Todo lo que hicieron para mí... cuando tuvieron que sacar el trigo levantaron el paro, sacaron el trigo y después volvieron. [*Cuentapropista, 53 años. Firmat, Abril de 2009*]

A continuación, se caracterizará una posición que desestimó los argumentos de los productores agropecuarios. Es un rechazo hacia la medida de fuerza y hacia la figura misma del productor agropecuario que fue consecuencia de la misma protesta. Principalmente, este punto de vista se apoyó en lo que se percibió como molestias ocasionadas a los habitantes

locales no afectados directamente por la Resolución 125. Por esa razón, esta posición se denominará “la crítica”.

El 11 de marzo de 2008, antes que crítica, existía indiferencia hacia los productores agropecuarios, pero con el paso del tiempo la protesta fue generando cierto rechazo en personas que en un principio simplemente la habían tolerado. Esta situación, de todos modos, no significó mayor simpatía hacia el Gobierno nacional, ya que desde esta posición se realizaron críticas a la gestión de Cristina Fernández y a la anterior de Néstor Kirchner, que coinciden con las realizadas por actores posicionados contra el Gobierno nacional.

Anteriormente, se dijo que una parte importante del apoyo recibido por el *campo* se debe a la integración de prácticas económicas. Teniendo en cuenta este razonamiento, puede decirse que “la crítica” provino de personas en una situación opuesta; es decir, personas cuyas prácticas económicas tienen un vínculo relativamente débil con la producción rural. Además, este tipo de actor tampoco está integrado en instituciones económicas o sindicales, sino que se encuentra inserto en sectores informales de la economía y presenta trayectorias laborales marcadas por la inestabilidad.

Esta situación laboral propició una reflexión según la cual, en comparación con la propia, la posición económica de los productores agropecuarios sería más que favorable. Básicamente, desde esta óptica se percibió que mucha gente, a lo largo de su vida, habría tenido mayores problemas que los que aquejaban por entonces a los productores rurales; e incluso, durante los días de la protesta contra la Resolución 125, aunque la situación no se hallaba exenta de dificultades económicas, siempre se las habrían arreglado por sí mismos para salir adelante.

Al brindar servicios cuyos clientes son potencialmente la totalidad de la ciudad, la problemática abierta con las retenciones móviles, si bien afectó económicamente a este actor, a pesar de todo no habría sido una situación para preocuparse, ya que poseería mayor capacidad de adaptación a nuevas coyunturas. Este tipo de razonamientos permitió a esta posición tomar distancia de la problemática del *campo*; ya que, precisamente, de una trayectoria laboral cuya característica principal es la inestabilidad y la constante necesidad de adaptarse a diversas situaciones puede decirse, retomando a Pierre Bourdieu (2007), que configuró esquemas de percepción y generadores de prácticas con mayor capacidad para manejar situaciones de incertidumbre económica.

Lo dicho hasta aquí de alguna manera explicaría por qué existió cierta indiferencia hacia el *campo* durante la protesta contra la Resolución 125, pero nada dice acerca de las críticas que suscitaron los cortes de ruta y las movilizaciones de los productores rurales.

La indiferencia tomó forma en el sistema económico local; es decir, fue un producto de la falta de integración de las prácticas económicas entre los indiferentes y la producción agropecuaria. Pero para comprender el malhumor que generó la protesta rural es necesario

analizar cómo repercutió la acción de los productores en la dinámica social interna; es decir, cómo influyeron las interacciones y las relaciones cara a cara que tuvieron como tema el conflicto del campo en las percepciones día a día en la ciudad.

El argumento utilizado por los agricultores para legitimar las medidas de fuerza respondió a una concepción de la localidad a la cual los críticos de la protesta no son ajenos. Como se dijo anteriormente, los productores rurales se presentaron ante la ciudad como el sector económico que haría posible la vida económica local. Esta premisa es parte del sentido común; sin embargo, las acciones de protesta ocasionaron que parte de la ciudad negara la situación privilegiada de la producción primaria, articulando, en respuesta, un discurso en el que *toda* la actividad económica y profesional sería importante.

Según la mirada de los ruralistas, los habitantes de Firmat debían tolerar y apoyar la protesta porque la actividad primaria es condición necesaria y suficiente para el desarrollo de la ciudad. Al comenzar la protesta, este argumento funcionó como elemento para justificar la manifestación rural, pero con el paso de los días, a causa del curso que tomó la acción contra las retenciones móviles, esta premisa perdió efectividad. La contraargumentación emergió como reacción a la forma en que los productores agropecuarios llevaron adelante la medida de fuerza. Ésta fue contraproducente e irritante para gran parte de los vecinos, que vieron la actitud del *campo* como abusiva y prepotente.

Si se aceptaba que el *campo* fuera la base de la localidad, la consecuencia lógica era que las actividades que no fueran el *campo* serían “el resto”. Precisamente contra esta premisa reaccionó esta posición, que se opuso a ser algo así como un miembro de segunda; a que otros, en este caso los productores agropecuarios, le dijeran que no son importantes, que todo sería igual sin las personas de su tipo. De allí surge la respuesta al discurso de los productores agropecuarios; de personas que se negaron a tolerar el destrato implícito en la postura adoptada por los productores rurales. Ya que en esta argumentación, un plomero, un obrero, un comerciante, un pequeño taller, un peluquero, un gasista o el personal de limpieza —a diferencia de los productores agropecuarios— serían prescindibles y desarrollarían actividades que podría realizar cualquiera.

Lo importante aquí es señalar la influencia en la protesta de la dinámica social de lugares geográfica y demográficamente reducidos. Las personas de una localidad pequeña interactúan a diario desde hace años y, cada día, estas interacciones condicionan las interacciones futuras. Un bloqueo de una calle en una ciudad grande es un bloqueo de un anónimo a otro anónimo. Si quien está impedido de transitar no está de acuerdo con la protesta, se fastidia; pero las consecuencias de la situación están ancladas al escenario del corte de calle, ya que en tanto desconocidos, no tienen vínculo previo y las posibilidades de

un vínculo futuro son muy reducidas. En cambio, en una localidad de 20 mil personas, la posibilidad del anonimato es prácticamente imposible.

En síntesis, esta posición, que como se dijo anteriormente expresa un cambio de humor respecto a la protesta, tuvo su origen en las muchas interacciones que posibilitó la alta disponibilidad de presencia que propicia el espacio local, ya que sin la interacción cotidiana durante los cuatro meses que duraron los cortes de ruta y las actividades de rechazo a la resolución 125, el malhumor contra el *campo* probablemente hubiese sido menor. Si hubiese habido personas indiferentes a causa de desarrollar una actividad económica no vinculada con el sector primario o que manifestaran desacuerdo en base a su posición política, pero no personas simplemente molestas con los productores rurales.

Considerando lo dicho hasta aquí, puede decirse que la existencia de este tipo de interpretaciones y opiniones sobre los hechos fue una *consecuencia no buscada* de la acción de los productores rurales.

5. Conclusión: lo local como posibilidad y límite de la protesta

Como conclusión, en base a la tipología presentada en el cuerpo del trabajo, puede decirse que en Firmat la acción de los productores rurales estuvo condicionada por un “ambiente” que, en este caso, se intentó caracterizar mediante la descripción de los otros cuatro elementos de la tipología. Este ambiente, en un momento dado, habilitó y proveyó recursos efectivos para que la acción contra la resolución 125 fuera exitosa, pero luego de un año los cambios de situación para cada una de las posiciones que conforman ese ambiente obturaron los intentos por reactivar la protesta.

Como se dijo anteriormente, en la localidad existió un fuerte respaldo a los productores rurales, pero parte de la ciudad no estuvo de acuerdo con el reclamo. Sin embargo, el Gobierno no pudo capitalizar el rechazo que generó la acción de los productores rurales para contrapesar las posiciones de apoyo a *el campo*. Ello se debe en parte a la existencia de un mandato tácito, propio de la vida comunitaria, de no generar problemas entre vecinos, pero también a que el Gobierno nacional estaba condicionado por la actitud de sospecha que existía (o existe) en gran parte de la ciudadanía sobre la política y los políticos.

El kirchnerismo no logró conseguir apoyos en la sociedad local pero además, con sus primeras reacciones, ocasionó que un grupo importante de personas que se hallaban al margen de toda participación u opinión política se posicionara en su contra. De esta forma, los intentos por lograr una salida favorable del conflicto abierto el 11 de marzo ocasionaron que muchas personas *actualizaran* momentáneamente en “antikirchnerismo” su percepción negativa de la actividad política. Este hecho fue determinante en el desarrollo de la protesta, ya que generó un clima permisivo que los productores agropecuarios supieron aprovechar.

Desde la Presidencia se exigía respetar la libre circulación de personas y mercancías, pero muchos de los que estaban imposibilitados de transitar apoyaban la protesta agraria. Se pedía, en nombre del bien común, la vuelta a la normalidad, pero parte importante de la localidad, con sus acciones y opiniones, legitimaba la acción de los ruralistas.

Si bien los resultados de una elección legislativa no son comparables con los de una elección presidencial y la complejidad de un fenómeno electoral excede la temática de este trabajo, puede señalarse que el cambio de humor respecto del Gobierno nacional a raíz del conflicto del campo quedó plasmado en las elecciones legislativas del año 2009. Por entonces, el candidato Agustín Rossi obtuvo en Firmat menos del 9% de los votos; situación que contrasta con las elecciones presidenciales de 2007, en las cuales Cristina Fernández obtuvo 31.3%. Pero, en términos electorales, también aquí las consecuencias prácticas del conflicto del campo parecen haberse diluido, ya que en las elecciones generales de 2011, el Frente para la Victoria obtuvo 41% en las categorías Presidente y Diputados Nacionales (porcentaje en sí mismo significativo, pero aún más si se considera que Hermes Binner participó de la contienda electoral).

Por su parte, los productores agropecuarios locales lograron en forma inmediata el apoyo de las instituciones económicas y políticas de la ciudad. La adhesión del Centro Económico a la protesta permitió que los impulsores pudieran mostrar una gran capacidad de movilización apenas comenzado el conflicto. La participación fue voluntaria, pero la coordinación de la acción grupal estuvo a cargo de instituciones económicas y sindicales. La producción rural es un engranaje fundamental del sistema económico local. Por esa razón, en un primer momento, los hechos fueron entendidos como un elemento disruptivo que afectaba el total de las prácticas económicas institucionalizadas. Así, la posición adoptada por los agentes económicos ante el conflicto por las retenciones móviles puede explicarse considerando la dependencia recíproca de las prácticas económicas institucionalizadas. Precisamente, este factor permitió las mayores muestras de apoyo público a los productores rurales; no la acción ocasional e individual de los vecinos. Sin embargo, esta instrumentación “desde arriba” no hubiese sido posible si los movilizados no hubiesen percibido que esa era la mejor opción para salir de la situación abierta el 11 de marzo; ya que los agentes económicos involucrados experimentaron la situación de tal modo que apoyar a *el campo* significaba apoyarse a sí mismos.

Un componente fundamental para que la protesta pudiera desarrollarse de ese modo fue el factor “comunitario”. La identificación de la localidad con la producción primaria contribuyó a cimentar una posición de consenso alrededor de la posición de los productores rurales. Eran vecinos (parte de un *nosotros*) movilizados contra una injusticia; un actor con altos niveles de aprobación yendo contra la máxima autoridad de un sistema político debilitado a causa del descrédito de los partidos políticos, que aún hoy existe en parte de la sociedad.

En marzo de 2009, al cumplirse un año del inicio del reclamo contra la Resolución 125, la dirigencia rural intentó regenerar el clima de protesta que existía en el 2008. Sin embargo, estos intentos no lograron reproducir la situación generada apenas un año antes. Al menos en Firmat, esto fue causa del cambio de humor de la ciudad con el *campo*.

En 2008, si bien no hubo manifestaciones contra la protesta rural, subrepticamente, con el paso de los días, los productores agropecuarios perdían legitimidad. En marzo de ese año un productor rural cualquiera, durante las muchas interacciones propias de su rutina, recibía muestras de apoyo y solidaridad. Básicamente, su entorno inmediato le daba la razón, lo justificaba y lo alentaba a seguir de esa misma forma. Un año después, el mismo productor, durante sus charlas cotidianas, no recibía la misma respuesta que cuando comenzó la protesta, e incluso en muchos casos se encontraron con la desaprobación de sus interlocutores. De este modo, los intentos por reactivar la protesta en 2009, lejos de recibir el apoyo logrado un año atrás, se ganaron las críticas de la ciudad. Cuando los vecinos le bajaron el pulgar a la protesta, los manifestantes cesaron, ya que el riesgo es que el grupo los sancione. En este contexto, una sanción moral de parte de sus vecinos sería peor que la problemática en torno a un impuesto, ya que casi la totalidad de los vínculos sociales y económicos de los productores rurales son relaciones medidas por relaciones sociales de “comunidad”.

Así, el éxito de la protesta fue producto del estado de cosas en la política y la economía local, y también del apoyo o la tolerancia de parte de los vecinos de la ciudad que reconocieron la importancia atribuida a la producción primaria. Entonces, los productores rurales lograron sumar a su causa a los agentes económicos que buscaban que la protesta finalizara; a personas caracterizadas por la desconfianza y el rechazo a la política que buscaban asestar un golpe al kirchnerismo; y a habitantes de la localidad que se solidarizaron con el aparente mal momento que atravesaban sus vecinos. Una vez finalizada la protesta, todos ellos vieron logrado su cometido: los productores rurales consiguieron derogar la Resolución 125 (aunque luego articularon nuevos reclamos); los agentes económicos se vieron satisfechos por el fin de la incertidumbre económica; mientras que los indignados con la política interpretaron la derrota del Gobierno nacional a manos del *campo* como el final de *los Kirchner* y, de este modo, por una vez, vieron a “los ciudadanos comunes” vencer a su “otro”. La “comunidad”, por su parte, durante el desarrollo de la protesta fue restando su apoyo a los productores agropecuarios a causa del fastidio generado por la acción del *campo*.

Entonces, una vez derogadas las retenciones móviles, los ruralistas locales habían perdido gran parte de sus apoyos; pero no a sus críticos. De este modo, adquirieron mayor peso

relativo las reacciones negativas contra el *campo*. Por esa razón, los intentos por reactivar la protesta contra el Gobierno nacional no funcionaron.

6. Bibliografía

Amaya, N. (2008, 3 de junio). El interior exige diálogo, *El Correo de Firmat*. Recuperado de: <http://ww.elcorreodigital.com.ar>.

Aronskind, R., & Vommaro, G. (comps.) (2010). *Campos de batalla*. Buenos Aires: Prometeo.

Aronskind, R. (2010). Cambio estructural y conflicto distributivo. En R. Aronskind y G. Vommaro. *Campos de Batalla* (pp. 327- 353). Buenos Aires: Prometeo.

Auyero, J. (2002). *La protesta. Retratos de la beligerancia popular en la argentina democrática*. Buenos Aires: Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires.

Barsky, O., & Dávila, M. (2008). *La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario argentino*. Buenos Aires: Sudamericana.

Bourdieu, P. (2007). *El sentido práctico*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Centro de Estudios de Desarrollo y Territorio (CEDeT) (2007). *Plan Estratégico Firmat*. Recuperado de <http://ww.firmat.gov.ar>.

Cremonte, J. P. (2010). Cada cual atiende su juego. La construcción del conflicto entre el Gobierno nacional y las entidades agropecuarias en *Clarín, La Nación y Pagina/12*. . En R. Aronskind y G. Vommaro. *Campos de Batalla* (pp. 227- 265). Buenos Aires: Prometeo.

Durkheim, É. (2008). *La división del trabajo social*. Buenos Aires: Gorla.

Elias, N. (1982). *Sociología fundamental*. Barcelona: Gedisa.

Giarraca, N., et al. (2008). Paro agrario: crónica de un conflicto alargado. *Realidad económica*, (237), 33- 54.

Giarraca, N. y Teubal, M. (coords.) (2010). *Del paro agrario a las elecciones de 2009. Tramas, reflexiones y debates*. Buenos Aires: Antropofagia.

Giddens, A. (1998). *La constitución de la sociedad. Bases para una teoría de la estructuración*. Buenos Aires: Amorrortu.

Glaser, B. y Strauss, A. (1967). *The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research*. Cáp. 3: "El muestreo teórico" y Cáp. 5: "El método de comparación constante del análisis cualitativo". Nueva York: Aldine Publishing Company. [Apuntes de la cátedra Metodología de la Investigación II, Lic. en Sociología, UNL, año 2006]

Goffman, E. (2006). *Frame analysis. Los marcos de la experiencia*. Madrid: Siglo XXI.

Grass, C. (2010). Actores agrarios y formas de acción política en la Argentina contemporánea. Un análisis de los grupos "autoconvocados" en la región pampeana. En R. Aronskind y G. Vommaro. *Campos de Batalla* (pp. 279- 312). Buenos Aires: Prometeo.

Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación (2006) *Programa Auditoría Ciudadana (PAC), Informe sobre la Calidad de las Prácticas Democráticas de Firmat, Provincia de Santa Fe, República Argentina.*

Luque, R. (2008, 29 de marzo). Firmat se unió en un mismo reclamo, *La Nación*. Recuperado de <http://ww.lanacion.com.ar>.

Melucci, A. (1999). *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México: El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos [Introducción y Cáp. 1].

Moltó, M. (2010). *Política, economía y socialización local. Repercusiones y significados de las actividades de rechazo a las retenciones móviles en Firmat entre marzo y julio de 2008*. (Tesina de licenciatura). Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe.

Revista *Laboratorio. Estudios sobre Cambio Estructural y Desigualdad Social*, (22), Buenos Aires, Invierno de 2008. Recuperado de <http://www.catedras.fsoc.uba.ar/salvia/lavbo.htm>.

Rougier, M. (2007). Producir para el agro en un entorno turbulento: El caso de una fábrica de cosechadoras en la Argentina. *Mundo agrario*, 7(14). Recuperado de <http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/>.

Sidicaro, R. (2008). La pérdida de legitimidad de los partidos políticos argentinos. *Temas y debates*, (16), 29-47.

Vommaro, G. (2010). 'Acá el choripán se paga': movilización política y grupos sociales en el reciente conflicto en torno a las retenciones a las exportaciones de granos. En R. Aronskind y G. Vommaro. *Campos de Batalla* (pp. 181- 226). Buenos Aires: Prometeo.

Weber, M. (2008). *Economía y sociedad. Esbozo de una sociología comprensiva*. México: FCE.

Weber, M. (2006). *Ensayos sobre metodología sociológica*. Buenos Aires: Amorrortu.

Yabrowski, N. (2010). Nosotros, ellos... todos. Los sentidos de la representación política y los recursos utilizados para ganar legitimidad en el conflicto. En R. Aronskind y G. Vommaro. *Campos de Batalla* (pp. 67- 118). Buenos Aires: Prometeo.

Zenclussen, J. y Neffen, G. (2009, 2 de mayo). En carrera contra la crisis. *El Litoral. Campo Litoral*. Recuperado de <http://www.ellitoral.com>.

Fecha de recibido: 1 de diciembre de 2011.

Fecha de aceptado: 22 de octubre de 2012.

Fecha de publicado: 9 de agosto 2013.